



Nota del Editor

CESE AL FUEGO

Un país horrorizado por la barbarie de la guerra recibe con alivio el anuncio conjunto del gobierno y las Farc de que se proponen estudiar la factibilidad de un cese al fuego. Estos pueden ser los “*hechos de paz*”, que habrían de producirse en la medida en que se avance en la agenda, según lo establece el comunicado del 29 de enero pasado.

Mas no podemos ignorar que el cese al fuego es, al mismo tiempo, un elemento fundamental de la estrategia militar. Una fuerza armada está dispuesta a pactar una suspensión temporal de las hostilidades si está convencida de que hacerlo mejora -o, al menos, preserva- sus posibilidades de triunfo a más largo plazo. Y si su contendor también tiene un pronóstico positivo al respecto, el cese al fuego como producto de un acuerdo es la consecuencia natural. De este modo, un recrudecimiento de la guerra es también un resultado posible de un receso transitorio.

En el caso específico del conflicto colombiano el cese al fuego tropieza con inconvenientes formidables. Ha sido señalado por otros pero es bueno reiterarlo, que un acuerdo para suspender la confrontación requiere de una autoridad independiente, dotada de los instrumentos técnicos adecuados y alta jerarquía moral que pueda establecer si alguna de las partes infringe sus compromisos. El candidato obvio para ejercer esta tarea son las Naciones Unidas pero éstas, infortunadamente, no han tenido mucho éxito como autoridad verifi-

cadora en algunos conflictos de Europa Oriental y el África. De hecho, si no recuerdo mal, no hubo disposición para asumir esta tarea en la fase final del conflicto salvadoreño, a pesar de que, gracias a su reducido territorio, parecía evidente que tendría la capacidad de realizarla.

Una tregua entre las Farc y el gobierno tiene consecuencias profundas en la dinámica de un conflicto del cual también hacen parte el ELN y las autodefensas. Una suspensión de hostilidades constituye una seria amenaza para ambos actores: la capacidad de acción militar que eventualmente se liberaría como producto de la tregua podría dirigirse en su contra.

Una mayor presión del ejército contra el ELN podría ser el catalizador que hace falta para lograr un acuerdo que permita iniciar con ellas un proceso de paz; o, alternativamente, inducirlo a incrementar sus acciones terroristas. Y una escalada de las acciones de las FARC y el Ejército contra las autodefensas probablemente sería respondida, como es habitual, con ataques a las bases de apoyo de la subversión. En términos llanos, un incremento de las masacres.

El análisis que precede conduce a la inevitable conclusión de que el proceso de paz tiene que incluir a todos los actores del conflicto armado. De otro modo, no sería exitoso.

En varias ocasiones, tanto dentro como fuera del país, el Presidente de la República ha dicho que las Farc no están involucradas en el narcotráfico. Esta apreciación, que luce contraevidente, incide en los alcances de una eventual tregua. Me refiero a que los batallones antinarcóticos dotados por los Estados Unidos y entrenados por asesores norteameri-

canos tendrían que continuar operando: desde el punto de vista formal, no han sido creados para combatir la guerrilla sino para prevenir el cultivo y movilización de estupefacientes.

En su sentido más riguroso, el cese al fuego consiste en la suspensión transitoria de las operaciones militares. Por sí solo en nada beneficia a la población civil que, en proporciones crecientes, se ve afectada por el conflicto bien sea por la vía de los secuestros, las vacunas o el desplazamiento forzado. Resultaría en verdad irónico que la tregua constituyese un alivio para los profesionales de las armas pero no para los ciudadanos inermes.

En la discusión de una eventual tregua habrá de surgir la preservación de la denominada zona de distensión, la cual, hasta ahora, se ha venido prorrogando por períodos relativamente breves. Cabe suponer que las Farc pretenderán darle al control que ejercen sobre una porción del territorio nacional un carácter más permanente. El Gobierno tendría que examinar cuidadosamente qué exigencias plantea a cambio de una prerrogativa de tan alto valor estratégico, político y militar para los alzados en armas.

El comunicado mediante el cual las Farc y el gobierno anunciaron su disposición para analizar el cese al fuego pone de presente las malas experiencias del pasado y advierte la necesidad de actuar con cautela. Está bien que así ocurra. Un acuerdo impreciso o incumplible puede crearle serias lesiones al proceso de paz.

